

Acuerdo de 20 de enero de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de servicios de “Dinamización de la participación infantil y adolescente”, número de expediente: 104/2019.

Con fecha 10 de enero de 2020 se ha recibido en este Tribunal recurso especial en materia de contratación de la representación de la empresa Asociación Centro Trama (en adelante Trama) contra el Acuerdo de la Mesa de Contratación (Certificación de fecha 19/12/2019) por el que se determina la exclusión de la recurrente de la licitación del contrato de servicios de “Dinamización de la participación infantil y adolescente”, número de expediente: 104/2019.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación a fin de evitar situación de indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos de los licitadores.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Recibido en este Tribunal el 15 de enero el expediente de contratación junto con el preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, el órgano de contratación manifiesta, en lo que se refiere a la petición de suspensión del



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037144728046290032179**

procedimiento, que el expediente objeto de recurso se encuentra pendiente de la valoración por parte de la mesa de contratación de la documentación aportada por el siguiente licitador con la mejor oferta, y entiende que la citada valoración no producirá un daño irreparable a la recurrente. Por ello solicita que para minimizar el impacto en el procedimiento de contratación, se permita la tramitación del mismo hasta al momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato, sin que ésta se llegue a producir en ningún caso.

Entiende el Tribunal que la medida cautelar de suspensión tiene carácter excepcional, dado que la tramitación del expediente de contratación solo se suspende automáticamente en el supuesto de que el acto recurrido sea la resolución de adjudicación como prevé expresamente el artículo 53 de la LCSP.

La posibilidad de adopción de medidas cautelares en relación con las distintas fases del procedimiento de adjudicación tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.



Por otro lado, teniendo en cuenta que en el presente caso no se va a dar una situación jurídica irreversible, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.6 de la LCSP *“La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración”*, y que no es previsible que se puedan producir perjuicios irreparables en los intereses de los licitadores, se considera procedente que el órgano de contratación pueda continuar la tramitación administrativa del procedimiento hasta el momento inmediato anterior a la adjudicación del contrato. Así se estima esta medida cautelar compatible con la finalidad que tiene el recurso especial en materia de contratación de obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato, y minimizando los posibles perjuicios para las partes intervinientes en el contrato.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de “Dinamización de la participación infantil y adolescente”, número de expediente: 104/2019, a partir del momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato, sin que el órgano de contratación pueda decidir sobre la misma hasta que este Tribunal haya resuelto sobre el recurso interpuesto por la representación de la empresa Asociación Centro Trama.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

